

UNIVERSIDAD EXTERNADO ENTREGÓ 47 ESTUDIOS SOBRE ESE FLAGELO

“La corrupción le costó al país \$189 billones entre 1991 y 2011”

● “No hay evidencia de que medidas anticorrupción hayan funcionado” y cuando lo hicieron fue tras décadas “y como resultado de reformas del Estado muy profundas”, según el documento

MÁS DE 189 billones de pesos, lo que equivale al 4% del PIB, le costó a Colombia la corrupción entre 1991 y 2011, según un documento titulado ‘100 puntos de la corrupción’ que resume los 47 estudios reunidos en la obra de cuatro tomos ‘La corrupción en Colombia’, publicados por la Universidad Externado.

“Al menos el 30% de estos hechos de corrupción se generan en los trámites que día a día realizan los colombianos”, precisó el documento retomando cifras de la Comisión Nacional Ciudadana de 2014.

Tras considerar que “la corrupción es considerada uno de los más importantes problemas de la humanidad”, el documento recuerda que “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la corrupción ‘distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sostenible de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas internacionales e incrementa los costes de operación



EL RECTOR de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, lanzó ayer un extenso estudio sobre corrupción en Colombia. /Universidad Externado

de las empresas en las mismas’ (OCDE, 2015). Sin embargo, a pesar de la persistente concordancia en términos teóricos, los esfuerzos para combatir la corrupción han sido hasta ahora claramente insuficientes”.

Así, destaca el documento, “no parece haber evidencia de que las medidas para disminuir la corrupción hayan funcionado en casi ningún caso”.

Según ese documento, cuando las medidas “han funcionado, ha sido en periodos muy largos (décadas) y como resultado de reformas del Estado muy profundas, en particular relacionadas con la eliminación del clientelismo y con la transición hacia Estados de tipo weberiano”.

El documento precisa que “tampoco es factible afirmar que no han tenido algún efecto, pero

en la medida en que la evidencia de su éxito es ambigua, en el mejor de los casos, o inexistente, en el peor, se debe ser cauteloso con el optimismo”.

La práctica del soborno parece tan arraigada en Colombia que según la Cuarta Encuesta Nacional Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas el 91% de los empresarios participantes consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos y, según la misma encuesta, los montos pueden alcanzar en promedio el 17,3% del valor del contrato, representando la cruda realidad que el 58% de los empresarios encuestados afirman que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”.

Congruente con el documento, el fiscal general Néstor Martínez consideró, en el marco del evento que realizó ayer para presentar los estudios, “limitado e insuficiente” el proyecto de ley que radicó en días pasados el gobierno Duque, dentro de un paquete legislativo, que elimina la imprescriptibilidad de delitos que atentan contra la administración pública.

Martínez Neira dijo que si bien es importante no permitir más a

quienes saquean los recursos públicos, que se adueñen de fortunas ilegales aprovechando que por el paso del tiempo prescriben los procesos, recordó que “también hay delitos contra la administración de justicia” que también requerirán de la imprescriptibilidad.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el Gobierno tiene la voluntad política de meterse a fondo contra la corrupción.

En tanto que en este mismo encuentro el contralor Edgardo Maya insistió en la necesidad de eliminar las contralorías regionales, porque dice que son ineficaces en su función, y dejar solo un órgano del nivel nacional. El procurador Fernando Carrillo propuso suprimir las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En este sentido Carrillo Flórez le propuso al Gobierno nacional presentar un proyecto de ley para modificar las corporaciones autónomas regionales, a las que calificó de ser el “nido de corrupción más grande que ataca los derechos fundamentales en Colombia”.

Carrillo precisó que el ente de control adelanta más de 250 indagaciones, otras 43 investigaciones y cerca de 30 acciones preventivas relacionadas con casos de corrupción en las corporaciones autónomas, procesos a los que se suman las actuaciones que llevan la Fiscalía, en lo penal, y la Contraloría en lo fiscal.

Por su parte, el contralor Maya Villazón reiteró su propuesta de eliminar las contralorías regionales y dejar la función de control fiscal en manos de una entidad del orden nacional. “Hoy hay 63, cada uno independiente”. Añadió que “en ninguna nación existe este caos en el control fiscal”.

¿‘Mico’ en proyecto del Gobierno?

UN POSIBLE ‘mico’ en el acto legislativo del Gobierno que establece la obligación de funcionarios públicos de hacer pública su declaración de renta, denunció ayer la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde.

La congresista encontró que en esa iniciativa de reforma constitucional, que hace parte del paquete anticorrupción radicado la semana pasada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, existe una sustancial reforma a lo que se habilitó en la implementación del acuerdo de paz.

“Elimina de tajo el párrafo de la Constitución que les abrió la puerta a los desmovilizados para reincorporarse de manera institucional”, sostuvo, agregando que “el gobierno Duque estaría eliminando la reincorporación institucional de

excombatientes tanto de la guerrilla como de los paramilitares. La pregunta es si es un descuido o se trata de un ‘mico’”.

Goebertus dijo que este proyecto de acto legislativo busca eliminar el último párrafo del artículo 122 de la Constitución política, que fue reformado en 2017 como parte del acuerdo de paz para permitir que excombatientes -tanto de grupos gue-

rrilleros como de paramilitares- pudieran ser reincorporados a la vida civil a través de contratos con el Estado.

Ese artículo de la Constitución les permite a exguerrilleros de las Farc hacer funciones de desminado humanitario en el territorio colombiano o que exparamilitares obtengan contratos con la Agencia de Reinserción para hacer servicios de atención psicosocial.

AVISO AL PÚBLICO

El Liquidador de RS HOLDINGS S.A.S. “En Liquidación” (en adelante la “Sociedad”) con domicilio en Bogotá D.C., en cumplimiento del artículo 232 del Código de Comercio, informa que mediante Acta No 006 de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, se decretó la disolución e inicio del proceso de liquidación de la Sociedad.

Atentamente

GUILLERMO ENRIQUE ROJAS GARCÍA
Liquidador Principal
RS HOLDINGS S.A.S. En Liquidación

TARIFAS DEL GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP)

Con base en las “TARIFAS DEL GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP)” publicadas por Ecopetrol y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG y la Ley 1151 de 2007.

La Comercializadora Mayorista PLEXA SAS E.S.P., vigilada por la SSPD
Informa que el precio máximo de referencia de GLP vigente
a partir del 15 de Agosto de 2018: es



Descripción	Fuente	Pesos por Kilogramo	Pesos por Galón
Ingreso por Producto GLP	CARTAGENA	1.420,11	2.740,67
	CUSIANA	1.216,56	2.462,81